

España: ¿nafragio en la democracia? Fracaso de las alternativas revolucionarias

Ma. Luisa Sánchez, Gloria Martínez-D., José Alvarez-J.

María Luisa Sánchez Rodríguez: Politólogo español.

Gloria Martínez Dorado: Politólogo español.

José Alvarez Junco: Politólogo español.

Surgido de una guerra civil, que destrozó y desarticuló completamente a los vencidos, y asentado sobre la base de una dictadura que no dejaba fisuras para la actividad organizada de ningún grupo de oposición, el régimen del general Franco consiguió pronto una estabilidad que supo mantener hasta el final de sus días. Pocos cambios, por no decir ninguno, había experimentado desde implantación en cuanto a sus grandes líneas político-sociales: unidad y uniformidad del país, ahogando cualquier manifestación de diferenciación cultural por parte de catalanes o vascos; sistema de partido único - el llamado "Movimiento Nacional" -, que ni siquiera resultaba ya operativo desde los años 60, con prohibición expresa de asociaciones con fines políticos; ausencia de libertades públicas; sindicato vertical y obligatorio; confesionalidad católica e íntima unión Iglesia-Estado; y modelo económico capitalista con escasa planificación o dirigismo estatal. La única novedad en los 40 años empezaba y terminaba en la institucionalización de una "democracia orgánica" para la elección de algunos diputados a las Cortes, que no representaban más que a sí mismos en un Legislativo sin la más mínima autonomía.

La sociedad española, sin embargo, si había cambiado. La había transformado el gran desarrollo económico iniciado en la década de los 60, facilitado por una coyuntura internacional favorable y por la emigración en masa de trabajadores a los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), e impulsado por la voluntad desarrollista del régimen. El nivel de vida subió de forma espectacular en 15 años y convirtió una población atrasada, ruralizada y permanentemente amenazada por la miseria, en una sociedad de consumo, con posibilidades de acceso a la educación y cultura. Desarrollo económico que exigió, por otro lado, poner fin al aislamiento internacional en que había vivido España tras la guerra civil. Los turistas - una de las fuentes principales del "milagro español" - empezaron a entrar por millones a través de nuestras fronteras, y con ellos las modas, las costumbres y las formas de comportamiento de las clases medias europeas, introduciendo en España la visión de un modelo liberal, laico y permisivo. Definitivamente abiertas

las fronteras, a la avalancha de personas siguió la llegada de las corrientes culturales de París, Londres o Roma; se multiplicaron las ediciones en castellano de los autores extranjeros del momento, y la censura cinematográfica o teatral empezó a mostrar grietas por las que se infiltraba silenciosamente la producción artística de vanguardia.

La izquierda bajo el franquismo

Estos nuevos factores - desarrollo económico, acceso a la educación apertura de las grandes ciudades, en una generación nacida ya después de la guerra civil. El rechazo, por parte de estos núcleos urbanos, de los parámetros culturales y políticos a los que se mantenía tercamente aferrado el régimen franquista, provocó la creación de subculturas propias, rebeldes y activas, cada vez más radicalizadas, que reclamaban un cambio total en la sociedad española y que mantenían su unidad en la bandera de la lucha política contra la dictadura y la oligarquía económica que la sostenía.

La mayoría de estos jóvenes progresistas que iban apareciendo en las universidades, llegaron a la lucha política y a los planteamientos revolucionarios a partir de la revisión crítica del pensamiento cristiano en que habían sido educados; el alejamiento de las jerarquías eclesiásticas y la búsqueda de una mayor pureza evangélica en sus vivencias religiosas, les hizo apartarse cada vez más del catolicismo oficial y conservador, y deslizarse hacia posturas comunitarias primero, socialistas y marxistas después. La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), la JOC (Juventud Obrera Católica) o las JEC (Juventudes de Estudiantes Católicos) fueron los primeros lugares de encuentro de una naciente oposición al régimen.

De estos grupos cristianos revolucionarios, junto con intelectuales de adscripción marxista, surgió, en 1956, el FLP (Frente de Liberación Popular), integrado mayoritariamente por estudiantes y que, en sucesivas fases, agitó la vida universitaria hasta 1969, especialmente en Madrid, Barcelona y el País Vasco. Los aires renovadores del Concilio Vaticano II y la distancia que a finales de los años 60, iban tomando los obispos españoles respecto al régimen, incorporaron a los deseos de reforma social a numerosas comunidades cristianas de base que proporcionaban, en muchos casos, futuros militantes a partidos marxistas ya en funcionamiento, o daban lugar a otros nuevos, como la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), creada en 1963 a partir de núcleos sindicales de orientación católica, pero declaradamente marxista desde sus orígenes.

La otra forma de llegar a la extrema izquierda, sin necesidad de pasar previamente por el radicalismo religioso, era el contacto con el Partido Comunista de España (PCE), la única organización política procedente de la guerra civil que había logrado sobrevivir en el interior del país con niveles significativos de militancia. Favorecido quizás, involuntariamente, por la propaganda monótonamente anti-comunista del franquismo, el PCE fue, durante muchos años, "el Partido" por ex-

celencia, y sus planteamientos estratégicos eran el punto de referencia obligado para cualquier toma de posición frente al régimen.

La crítica al planteamiento de superación de la guerra civil y de la lucha por las libertades políticas que mantenía tenazmente el PCE, produjo, en la década de los 60, diversas escisiones de sus militantes que dieron lugar a otros tantos partidos revolucionarios, seguidores de la ortodoxia leninista e incluso stalinista en su versión maoísta. Tal fue el caso del PC (m-l) - Partido Comunista (marxista-leninista) -, escindido en 1964, y propulsor del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que opta por la lucha armada en 1975 del PCI (Partido Comunista Internacional) separado del PCE en 1968 y transformado después en el PTE (Partido del Trabajo de España); y de la Organización Comunista de España (Bandera Roja). También en la línea marxista-leninista, pero procedente del nacionalismo revolucionario vasco, se creó, en 1972, el MC (Movimiento Comunista), que fue poco a poco extendiendo sus actividades al resto de las regiones españolas. Estos grupos, muy minoritarios en sus comienzos, se autoafirmaban en la severa crítica a los objetivos reformistas del PCE y en el carácter antimperialista que orientaba siempre sus posiciones políticas.

La crisis del sistema del partido rígido y centralizado como instrumento imprescindible en la lucha por el socialismo, planteada en los primeros 70, provocó nuevas escisiones, reagrupaciones y transformaciones entre los grupos izquierdistas, que añadieron a sus planteamientos revolucionarios la reflexión sobre las formas de organización de la clase obrera y demás capas populares. Surgieron entonces grupos de tendencia asamblearia, partidos de una mayor flexibilidad en el encuadramiento de militantes y normas de funcionamiento interno, así como de una diversificación del espacio de actuación. Las Asociaciones de Vecinos, las Comisiones de Presos, los grupos feministas o las organizaciones de sectores marginados que empezaron a florecer en las grandes ciudades, nacieron en parte gracias al esfuerzo de estos pequeños partidos izquierdistas, entre los que puede nombrarse a la OCIE (Organización Comunista de la Izquierda Española); UCL (Unión Comunista de Liberación); MLC (Movimiento de Liberación Comunista); o los Movimientos de Autónomos.

El panorama que, a la muerte de Franco, en 1975, presentaba esta "izquierda de la izquierda", se completaba con los partidos trotskistas - LAR (Liga Comunista Revolucionaria); LC (Liga Comunista) - adheridos a alguna de las secciones de la IV Internacional, y con los grupos anarquistas - CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), Ateneos Libertarios -, ambigua mezcla de los restos del poderoso anarcosindicalismo español. de tiempos de la IIª República, y los ácratas intelectuales e individualistas con resonancias del Mayo francés.

Es muy difícil hablar de cifras de militantes en unos partidos que vivieron, hasta 1978, en la ilegalidad. En cualquier caso, nunca contaron con más de siete u ocho mil personas en un país con 35 millones de habitantes. Sin embargo, la débil imagen que presentan siempre las dictaduras hacia que cualquier acción o denuncia,

llevada a cabo por un puñado de militantes, alcanzara una resonancia desproporcionada con su peso real en la sociedad. Unían sus voces a la voz general de la oposición y, desde las trincheras de la clandestinidad, resonaban todas juntas.

Había, desde luego, un denominador común que diferenciaba a esta externa izquierda, de la izquierda tradicional, es decir, del PCE, y era su rechazo a cualquier tipo de transacción presente o futura, no ya con la dictadura - a lo que tampoco estaba dispuesto el PCE -, sino con una democracia burguesa o parlamentaria según el modelo occidental. Prosoviéticos o prochinos, trotskistas o marcusianos, el objetivo para todos ellos era el gran cambio que subvirtiera las estructuras económicas y sociales de España y trajera la implantación de un estado socialista dirigido por el proletariado, cuyo último ideal era la sociedad comunista sin clases ni autoridad. Con perfiles ambiguos y difusos, sin un modelo claro, las Líneas maestras para la construcción de esa nueva sociedad quedaban siempre sin definir, pero constituían el horizonte hacia el cual había que caminar y que jamás se alcanzaría sin un paso previo, indiscutible e irrenunciable: la revolución. Palabra mítica, cargada de resonancias idealizadoras del pasado - la revolución francesa, la gran revolución rusa -, sin conciencia clara de sus costos en el futuro, y con tantos significados como partidarios: abolición de la propiedad privada, confiscación de tierras, disolución del ejército y creación de milicias populares, autodeterminación de los pueblos, desaparición de la familia, libertad sexual..., y, sobre todo, destrucción del poder económico y político de las clases dominantes; hundimiento en suma del sistema capitalista. Si para producir esta llamarada purificadora era necesario pasar primero por un período - breve - de libertades formales y parlamentarismo, o si podría hacerse el tránsito directo de la dictadura al socialismo, era tema de apasionadas y continuas discusiones, pero, en cualquier caso, se coincidía en la necesidad de no pactar con las clases dominantes, en no facilitar ninguna "salida" al franquismo, en crear frentes de lucha sólo con partidos y organizaciones de izquierda, populares antifascistas y anticapitalistas.

La corriente revolucionaria se introdujo incluso en el renovado PSOE (Partido Socialista Obrero Español), partido que empezaba a rehacerse, ya en los 70, de la dispersión y la ausencia en el interior del país provocadas por la derrota en la guerra civil. Su estructura flexible y el menor control efectivo de la dirección sobre sus bases, admitía militantes poco disciplinados con la línea general de sus dirigentes, y grupos vagamente trotskistas o incluso luxemburguistas encontraron en las Juventudes Socialistas un buen acomodo para intentar llevar al partido hacia posiciones más radicales, aprovechando las facilidades de lo que empezaba a ser una importante formación política, con dinero y apoyo de la Internacional Socialista.

La proliferación y el éxito relativo de las huelgas, el conflicto permanente y generalizado en las universidades, y el eco cada vez mayor que encontraban las voces de protesta contra la dictadura, hacían creer a los partidarios de la revolución que su alternativa era la única posible al régimen franquista y que el pueblo español compartía su repulsa de cualquier reforma o transacción. Era un espejismo. Naci-

dos en las élites intelectuales y engrosados con las vanguardias obreras más conscientes, los grupos revolucionarios nunca habían dejado de ser una minoría, reducida en las grandes ciudades de las que sólo habían salido para saltar a ciertos núcleos mineros o a sectores del campo andaluz en situación casi desesperada. Las masas populares, a quienes estos grupos pretendían representar, no soñaban con la revolución y, hasta la muerte de Franco, no despertaron siquiera a los problemas políticos. La izquierda mayoritaria era moderada y no revolucionaria, y empezaba ya a repartirse entre el PCE y el PSOE. Los grandes cambios, la transformación total, pertenecían a un futuro lejano. El presente, sin embargo, reclamaba toda la atención.

La fascinación por la democracia

Al avanzar la década de los 70, fracasados año tras año los intentos de resquebrajar la dura coraza de la dictadura, las esperanzas de la izquierda estaban puestas en la muerte de Franco, que necesariamente abriría un nuevo período en la historia de España. No habría derrocamiento sino consunción y había que preparar el tránsito. Poco a poco la vía democrática se fue convirtiendo en la única posible y, lo que es más, deseable. La lucha contra la dictadura era la bandera común que habían desplegado intelectuales liberales, viejos militantes socialistas, católicos progresistas, eurocomunistas y revolucionarios; los objetivos inmediatos eran libertad de expresión y asociación, cauces legales de participación política, respeto a las minorías... democracia en fin, pura y simple, como la que correspondía a una nación desarrollada y civilizada, como la que disfrutaban nuestros vecinos europeos, a los que siempre habíamos mirado con envidia. España quería ser Europa, aunque Europa nos rechazara.

Las libertades formales no eran sólo la aspiración de liberales o democristianos, antiguos colaboradores del franquismo deseosos de distanciarse de él en su agonía, sino que estaban en el programa y en los objetivos del PCE. Desde mediados de los años 50, el "partido" había desarrollado toda su táctica política en torno a la necesidad de superar la dicotomía "vencedores y vencidos", y proceder a una reconciliación nacional que, tras la amnistía para todos los presos y exiliados políticos del franquismo, permitiera el diálogo de las dos Españas para construir juntas el futuro. Todos los grupos políticos y todas las posturas ideológicas no fascistas serían bienvenidos y aceptada su colaboración para acabar con la dictadura. El modelo eurocomunista, al que firmemente se adhirió el CE, de participación parlamentaria y conquista del poder por vías legales y pacíficas, parecía especialmente diseñado para combatir a un régimen autoritario de corte fascista como el español, contra el que era necesario clamar en nombre de la libertad y no de la dictadura del proletariado, en nombre de la solidaridad y no de la lucha de clases.

"Amnistía", "Reconciliación Nacional" y "Libertades Democráticas" eran las consignas con las que el PCE había movilizadomachaconamente a los sectores de iz-

quierda durante años, y la propuesta de un modelo donde, por fin cupiéramos todos, había encontrado eco en un país todavía traumatizado por ese millón de muertos de la guerra civil, que tenía miedo de los fantasmas de su pasado y no se atrevía a pensar siquiera en aventuras políticas que le pudieran llevar de nuevo a una confrontación violenta. E incluso los partidos a la izquierda del PCE se dejaron arrastrar hacia esta estrategia de conseguir prioritariamente la democracia formal, y, especialmente en los últimos años de Franco, todos incluían en sus programas las libertades democráticas y un marco legal de actuación como objetivo principal a corto plazo.

La sociedad española de 1975, aún conservando su memoria histórica, había cambiado profundamente y nada tenía ya que ver con la de 1931. El desarrollo económico había traído la moderación política. Esa inmensa clase media o pequeño-burguesa que abarca hoy a la gran mayoría de la población española tenía ya mucho que perder en un periodo de agitación revolucionaria, y a un cambio de régimen sólo pedía mayor capacidad de consumo, enseñanza gratuita, sanidad eficaz, buen funcionamiento de la administración, libertades públicas y tranquilidad en las calles. Es decir, las reformas necesarias para modernizar la sociedad y el aparato político españoles.

Desde el exterior se miraba también con curiosidad, no exenta de cierto recelo, el cambio político que habría de iniciarse cuando faltara el general Franco. El proceso que sufrió Portugal en 1974, donde a la caída inesperada de una dictadura había seguido una situación prerrevolucionaria, con un claro predominio del Partido Comunista, hizo temer a las potencias occidentales que algo similar sucediera en España si se permitía que, como en el país vecino, el PCE fuera la única fuerza política organizada en la oposición. Para conjurar esta amenaza, los países europeos, y muy especialmente Alemania empujada por el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) de W. Brandt, decidieron apoyar sin reservas al PSOE, ayudándole a convertirse en la gran alternativa reformista y moderada. Más aún cuando la elección de Felipe González en el Congreso celebrado por este partido en Suresnes, en 1974, supuso la total renovación de los cuadros del viejo PSOE y el inicio de su firme caminar por la vía socialdemócrata, haciendo así posible el monopolio de la imagen de cambio de la España franquista a la España democrática.

La democracia se construyó tras la muerte de Franco a través de un proceso difícil y original, basado en la negociación y el pacto pragmático, que implicó en la práctica el aislamiento de los sostenedores ideológicos de la dictadura (extrema derecha), y la marginación de aquellos sectores más radicalmente críticos contra ella (extrema izquierda).

La transición

Los hechos son bien conocidos, y a la interpretación de los mismos se han dedicado ya numerosos estudios sociológico-políticos.

El gobierno Arias-Fraga (9-75/7-76) se puede considerar como un intento estrepitosamente fracasado de poner en pie una democracia limitada y otorgada sin contar con las fuerzas políticas ajenas al franquismo, y utilizando la represión y las viejas maneras tanto contra las protestas obreras como contra cualquier otra manifestación o iniciativa popular que se saliera de los estrechos límites permitidos.

Desde mucho antes de la muerte del dictador, la fragmentada y sectaria oposición al régimen había hecho múltiples intentos de superar sus viejos enfrentamientos logrando una unificación o al menos concertando una salida para la dictadura a través de pactos de amplitud y representatividad diversa y, en todo caso, difícil de verificar. Tras los diversos acuerdos y alianzas de los años 40 y 50, se llegó al llamado "Contubernio" de Munich (1962), pero cuando el proceso realmente se aceleró fue en los últimos meses del franquismo y primeros del posfranquismo, con la Junta Democrática (1974) y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975), hasta culminar en la Coordinación Democrática (1976). Por primera vez, y en buena parte debido a la escasa habilidad política del gobierno Arias-Fraga, desde Gil-Robles hasta los maoístas se agrupaban bajo unas mismas siglas y tras las mismas reivindicaciones.

Pero, junto a esta institucionalización del proceso transaccional, y hasta que éste se consolidó con las primeras elecciones generales y constituyentes de 1977, se producían en las calles y fábricas una serie de luchas reivindicativas - tanto económicas, como sociales y políticas - que, apoyadas por los partidos y grupos de la izquierda y la extrema izquierda, empujaron la transición hacia su resultado final.

La democracia otorgada era rechazada desde todos los frentes, y el sorprendente ascenso de Suárez a la presidencia de gobierno iba a tener un significado preciso: ser el exponente de la convergencia entre la reforma desde arriba y las reivindicaciones o presiones desde abajo. Se iniciaba así la etapa denominada de "ruptura pactada" o de "transición" cuyo objetivo era la instauración de una democracia estable por medios evolutivos y no traumáticos.

La cuadratura del círculo de la reforma parecía conseguida, pero aún queda una pregunta por hacerse: si las movilizaciones y la combatividad social fueron tan fuertes y determinantes que hicieron caer el gobierno de Arias, ¿qué pasó para que acto seguido el cambio de situación se hiciese tan moderadamente? La respuesta no puede ser absoluta, sino matizada y relativizada teniendo en cuenta los múltiples factores que confluyeron y el tipo de sociedad en que se produjo.

Por un lado, sabemos que los grandes partidos de la izquierda (PSOE y PCE) se avinieron a pactar con la representación de los grupos sociales en el poder hasta el punto de ser acusados de traidores a sus propias bases y principios. Por otro, hay que observar que el "desbordamiento de las vanguardias" (pues se frenaron luchas que sobrepasaban los objetivos tácticos de los dirigentes) fue efímero, ya que inmediatamente se produjo un indiscutible decrecimiento de la movilización

popular y de la militancia, tanto sindical como de partido. Todo ello íntimamente ligado a la celebración de elecciones para Cortes Constituyentes.

Parece sociológicamente demostrado que la población de cualquier país tiende a ser moderada en sus reivindicaciones y a solidarizarse con las dificultades del país, cuando su nivel de necesidades económicas ha sido mínimamente satisfecho y sus expectativas de mejora son apreciables. Y este fue el caso de España cuando se inicia el proceso democrático y las elecciones a Cortes despiertan toda clase de esperanzas, sobre todo teniendo en cuenta que una crisis económica de grandes dimensiones sacudía todo el mundo occidental desde 1973.

Razones éstas que ayudan a comprender no sólo la marginación de la extrema izquierda, y por supuesto de la extrema derecha, en las elecciones del 77, sino también el desastre del PCE. El gran optimismo del "mayor y más fuerte partido de la izquierda", como le gustaba decir a su secretario general, Santiago Carrillo, que pensaba obtener al menos un 19 o un 20%, se convirtió en enorme decepción cuando se supo que no sacaría más de un 8% de los sufragios. El PSOE, por su parte, demostró no sólo que "donde se tuvo, siempre queda" sino, sobre todo, que sus líderes recién renovados estaban más cerca de la realidad del país que el resto de la izquierda.

La democracia, evidentemente, supone un espacio social más abierto y más libre. Espacio en el que se van a mover los actores políticos de acuerdo con unas pautas y mecanismos en principio transparentes. Pero cada juego tiene su trampa, y éste de la democracia no sólo significa mayor libertad política, sino también que la política va a tener su propio tiempo y espacio propios y por tanto separados (como espacio objetivo de la política) de nuestra cotidianeidad (espacio subjetivo). Es decir, va a tener una instancia mediadora entre nosotros y el poder: el parlamento; y un tiempo preciso para llamar nuestra atención: las elecciones.

Naufragio de la democracia

Así, la representación - cualidad que define a la democracia - implica delegación de poder, es decir renuncia a la acción política por uno mismo. Y la democracia supone también negociación, pacto e institucionalización de las organizaciones que los llevan a cabo. En resumen, sus mecanismos de funcionamiento no se avienen con instrumentalizaciones tendentes a su destrucción, sino más bien a su reforzamiento y profundización.

Las organizaciones que estudiamos de la extrema izquierda mantuvieron siempre un cierto desprecio hacia la democracia "formal" o "burguesa", en contraposición a una democracia "real" o "directa" de auténtica participación popular. Pero sus planteamientos de lucha política se acababan pronunciando, con ligeras variantes, en favor de la utilización de esta misma democracia formal como medio de acceder a la etapa superior de democracia "real" y de trabajadores.

Este desprecio hacia la democracia, que les hizo más escépticos y duros a la hora de negociar o de presionar frente a las clases dominantes en el proceso que desembocaría en las elecciones, no les impidió, por tanto, intentar utilizar las elecciones tal y como las demás formaciones políticas lo hacían. Sus alegados motivos propagandísticos no deben llamar a engaño por mucho que se insista, ya que la propaganda y el parlamento forman las dos caras de una misma moneda: la representación o delegación de la soberanía. Todos ellos, de hecho, deseaban verse representados en el parlamento, y alguno, como la FDI, esperaba obtener unos 15 diputados.

El espectro político de extrema izquierda encuadró en el momento de las primeras elecciones generales a los siguientes grupos: PTE, ORT y MC como las organizaciones de máxima incidencia dentro del espectro maoísta; PC (m/l), o marxistas-leninistas más dogmáticamente fieles al maoísmo; por otro lado, los grupos trotskistas, con la LAR como el más significativo entre ellos; por último, una docena al menos de pequeños grupos y organizaciones comunistas que bajo diversas siglas combinaron el radicalismo, el populismo, el consejismo y la lucha subversiva permanente, con componentes de leninismo, trotskismo, maoísmo y aun anarquismo.

Dado que el máximo de legalización alcanzado en el 77 fue la del PCE, las organizaciones de extrema izquierda que entraron en el juego electoral lo hicieron como coaliciones políticas de distinta composición y bajo distinto nombre. Así: el FDI, o el Frente Democrático de Izquierdas, integrado por el PTE, el Partido Socialista Independiente y el Bloque Democrático Social; La Candidatura de los Trabajadores, integrada por la ORT; la FUT., o Frente de Unidad de los Trabajadores, con la LAR, AC y OIC; y la CUP., o Candidatura de Unidad Popular, integrada por el MC, el PCT (Partido Comunista de los Trabajadores) y personalidades independientes.

El resto de grupos no integrados en ninguna de las formaciones mencionadas optaron por la abstención o, en los casos de mayor ceguera, por el boicot a las elecciones.

De los que entraron en el juego democrático, puede afirmarse que ello significó la quiebra de su política revolucionaria, así como la demostración de que demasiados se disputaban un espacio político muy reducido, con programas endebles y no muy diferentes unos de otros. La FUT se caracterizaría por su consigna de disolución de los cuerpos represivos, por su petición de la autodeterminación de las nacionalidades y por su mayor énfasis en la crítica del imperialismo. La "Candidatura" de ORT y el FDI, serían claramente homologables con la política del PCE (en el argot político, "seguidistas"); y la CUP por fin, supondría la mayor renovación al integrar en su programa reivindicaciones más autogestionarias y de impulso a las asociaciones de base y asamblearias.

El naufragio electoral del 77, con sólo un 3% del electorado repartido para toda la extrema izquierda que presentó candidaturas, parece demostrar fehacientemente su escasa inserción en la sociedad. Aunque hay que aceptar su justificación, tan repetida, de que su menor capacidad económica mermó sus posibilidades, al tener la propaganda la importancia que tiene como instrumento de comunicación de masas, tal factor no explica suficientemente su fracaso electoral. Este debe relacionarse más bien con la inadecuación a las características actuales de la sociedad, tanto española como europea, del modelo ideológico y organizativo por ellos propugnado.

Tras la explosión gloriosa y fracasada de la última jornada revolucionaria europea que fue el Mayo francés, los grupúsculos y sectas trataron desesperadamente de sobrevivir y autolegitimarse. Sus objetivos eran tan diversos y ambiciosos como la transformación total de la vida cotidiana, la diversificación de los focos de subversión, o el antiautoritarismo radical. Para todo ello, la férrea dirección de las masas por las vanguardias propugnada por el leninismo era inútil. Y hay que observar que las críticas al viejo modelo organizativo trascendieron su momento e impregnaron fuertemente los posteriores movimientos sociales, despojando de sentido la misma existencia de los grupúsculos, pues al fin y al cabo también eran como dicen Deleuze y Guattari, "máquinas de aplastar deseos".

Pero, por otra parte, la quiebra del modelo revolucionario respondía a la pérdida de credibilidad y fin de las ilusiones puestas en las experiencias de sociedades que habían hecho la revolución socialista (URSS, China, Cuba, Vietnam). Todo un código de pensamiento se hundía y los intentos renovadores eran imposibles.

La crisis de la izquierda europea quedó patente después del Mayo-68, y las alternativas organizativas e ideológicas que dejó abiertas no se correspondían con los grupos que siguieron adhiriéndose al marxismo, ya fuera desde perspectivas maoístas, trotskistas, guerrilleras o dogmáticamente leninistas. España, en esto, tampoco sería diferente, y sufriría el mismo proceso desacralizador del viejo milenarismo revolucionario que, a pesar de todo, algunos grupos siguen aún hoy manteniendo.

De los grupos que se presentaron a las elecciones sólo el MC y la LAR siguen existiendo en la actualidad, aunque mermados de militantes. La ORT y el PTE, después de su fugaz fusión en un solo Partido de los Trabajadores, desaparecieron de la escena política y sindical, en beneficio del PSOE y el PCE. Y lo mismo se puede decir del resto de grupos, grupúsculos o sectas que llegaron a existir "contra" el franquismo.

De ahí que el **desencanto** surgiera e hiciera estragos entre los líderes y militantes de estos grupos "encantados" con una revolución inalcanzable y que han quedado marginados no solo de la vida política del país, sino también, y ahora claramente, de la parte alícuota de "masas" que decían representar.

La vida política como espacio objetivo estaba cada vez más separada del espacio político subjetivo o de la actuación directa de todos y cada uno de los españoles que habían puesto sus esperanzas en la democracia. La moción de censura presentada contra el gobierno de la UCD por el PSOE (primavera/80) supuso una primera ceremonia de desencantamiento, en llanto que despertó expectativas de que era posible la comunicación y el entendimiento entre los representantes y los representados. Pero no fue hasta el fracasado intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 cuando las conciencias se despertaron y se hizo evidente que los representantes necesitaban a los representados para algo más que para que les votaran cada cuatro años. La respuesta popular, desde Fraga hasta el ciudadano apolítico de toda la vida, no decepcionó sino que dignificó la recién salvada democracia.

Algunos de los viejos militantes decepcionados o huidos de sus organizaciones anteriores, han intentado buscar otras formas organizativas y alternativas que recogieran los restos de movimientos marginales y periféricos (la Asociación para la Renovación de la Izquierda), o han atizado la creación de movimientos convergentes de luchas dispersas. Pero la pluralidad de focos de "subversión" existentes (y habría que subrayar la dificultad de cualquier planteamiento realmente "subversivo" dentro de una democracia) y lo diverso e irreconciliable de sus objetivos - las feministas no confluyen con los homosexuales, ni los locos con los presos, ni los nacionalistas con la lucha de vecinos de un barrio, ni las exigencias de los parados con las de los sindicatos - hacen que cualquier esfuerzo que intente integrar en un todo esta multiplicidad desemboque en el fracaso.

Estas mismas razones dificultan igualmente la instrumentalización por parte de los grandes partidos mayoritarios de todos estos movimientos de protesta social. Son conflictos, en definitiva, que se sitúan en la esfera de lo cotidiano y no en la de la política de Estado.

Sólo en los casos en que un grupo ha identificado su política con un tema exclusivo, como el nacionalismo, la izquierda revolucionaria, e incluso grupos armados, tiene aún importancia destacada en la vida política y en el tejido social en el que se inserta. Así ocurre en Euzkadi y Navarra, únicos lugares de España donde una coalición (Herri Batasuna), que no se recata en declararse voz de una organización armada (ETA militar), es fuertemente votada por la población, hasta llegar a ser la tercera fuerza política en importancia. También allí, otra formación de izquierda nacionalista (Euzkadiko Ezquerria) ha logrado mantener su fuerza e incidencia a lo largo de todo el proceso (77-83).

Esta irreductibilidad del nacionalismo de izquierda, así como el permanente peligro que para la democracia supone la continuada presencia de la lucha armada, responde también, claro es, a factores históricos precisos y a una especial ceguera política de los sucesivos gobiernos, al menos hasta octubre de 1982.

El problema del nacionalismo es uno de los problemas más intrincados con los que se topa la teoría política desde hace dos siglos, y no es éste el lugar para intentar analizarlo, pero sí se puede apuntar que el deseo de autodeterminación, de encontrar las señas de identidad perdidas es una fuerza movilizadora nada despreciable.

Conclusiones

Entre las causas que confluieron a la quiebra de las expectativas revolucionarias en la transición política española hay que destacar, en primer lugar el propio cambio experimentado por nuestra sociedad en las dos décadas anteriores. El crecimiento económico y el desarrollo cultural trajeron como consecuencia la moderación política de la inmensa mayoría de la población, así como la de los diferentes partidos con posibilidades de representación parlamentaria.

Por otra parte, no hay que olvidar la propia fortaleza política del régimen, incluso después de la muerte del general Franco, lo que daba a sus sucesores (en concreto al presidente del gobierno, Suárez) una considerable fuerza negociadora. Sobre el trasfondo social de una sociedad de consumo nada entusiasmada ante la continuidad de la dictadura, pero tampoco dispuesta a embarcarse en aventuras revolucionarias, era fácil la convergencia entre una derecha que poseía un aparato estatal intacto pero sin proyecto político y una izquierda que ofrecía un proyecto de reforma política moderada.

Todo ello contribuye a la creación de un clima en el que la vía electoral aparece como la única legítima y obliga a la competencia en las urnas a todas las formaciones políticas.

Las exigencias del sistema democrático así planteado implican la exclusión de posiciones radicales, asumidas siempre por vanguardias con fuerte conciencia revolucionaria, pero carentes del apoyo masivo necesario para llegar al parlamento. Los partidos de extrema izquierda pretendieron, no sólo utilizar las elecciones con fines propagandísticos, sino obtener pequeñas parcelas de poder en las instituciones recién creadas, lo que les llevó en la práctica a rebajar las reivindicaciones de su línea revolucionaria y a disputar un espacio político ya ocupado por partidos mayoritarios. La falta de medios financieros para competir con los grandes partidos en la batalla de la propaganda electoral, y la dificultad de transmitir un mensaje revolucionario utilizando medios propios de la publicidad comercial - prensa, radio, TV -, contribuyeron también a su naufragio.

Por otro lado, la amenaza de involución por parte del ejército, mantuvo a la democracia en una situación de fragilidad que fue utilizada por los partidarios de posiciones moderadas para excluir extremismos. Estos temores se vieron confirmados por la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero, por parte de algunos sectores del ejército y la guardia civil, que, paradójicamente, vino a reforzar el

sistema democrático, al acudir todas las fuerzas políticas de izquierda y derecha en su ayuda. La fragilidad de las libertades, tan largo tiempo esperadas, y la posibilidad de perderlas repentinamente, hizo que se valoraran en mayor medida que en el momento de su instauración. Desde aquel 23 de febrero hasta la victoria socialista en los comicios de octubre de 1982 sostener la democracia volvió a ser el objetivo común de toda la izquierda como antes lo había sido el derrocamiento de la dictadura. Los proyectos revolucionarios parecieron definitivamente alejados.

Por último, no debería olvidarse la crisis ideológica y organizativa de la izquierda europea que coincidió con el proceso de la transición española. Las grietas abiertas en el bloque socialista con los acontecimientos en Checoslovaquia, Kampuchea, Afganistán o Polonia, el aumento de la disidencia en la URSS, y las luchas por el poder en China acabaron por destrozar el paradigma de la revolución socialista y del partido revolucionario de corte leninista, cuyo prestigio ven la sufriendo un desgaste entre la izquierda occidental desde 1956 (XX Congreso del PCUS e invasión de Hungría). La izquierda española puso también en tela de juicio sus objetivos últimos y su forma de organización, y esta reflexión facilitó su dispersión y reconversión en grupos marginales al sistema o su trasvase hacia opciones reformistas, plenamente respetuosas con el sistema democrático liberal.